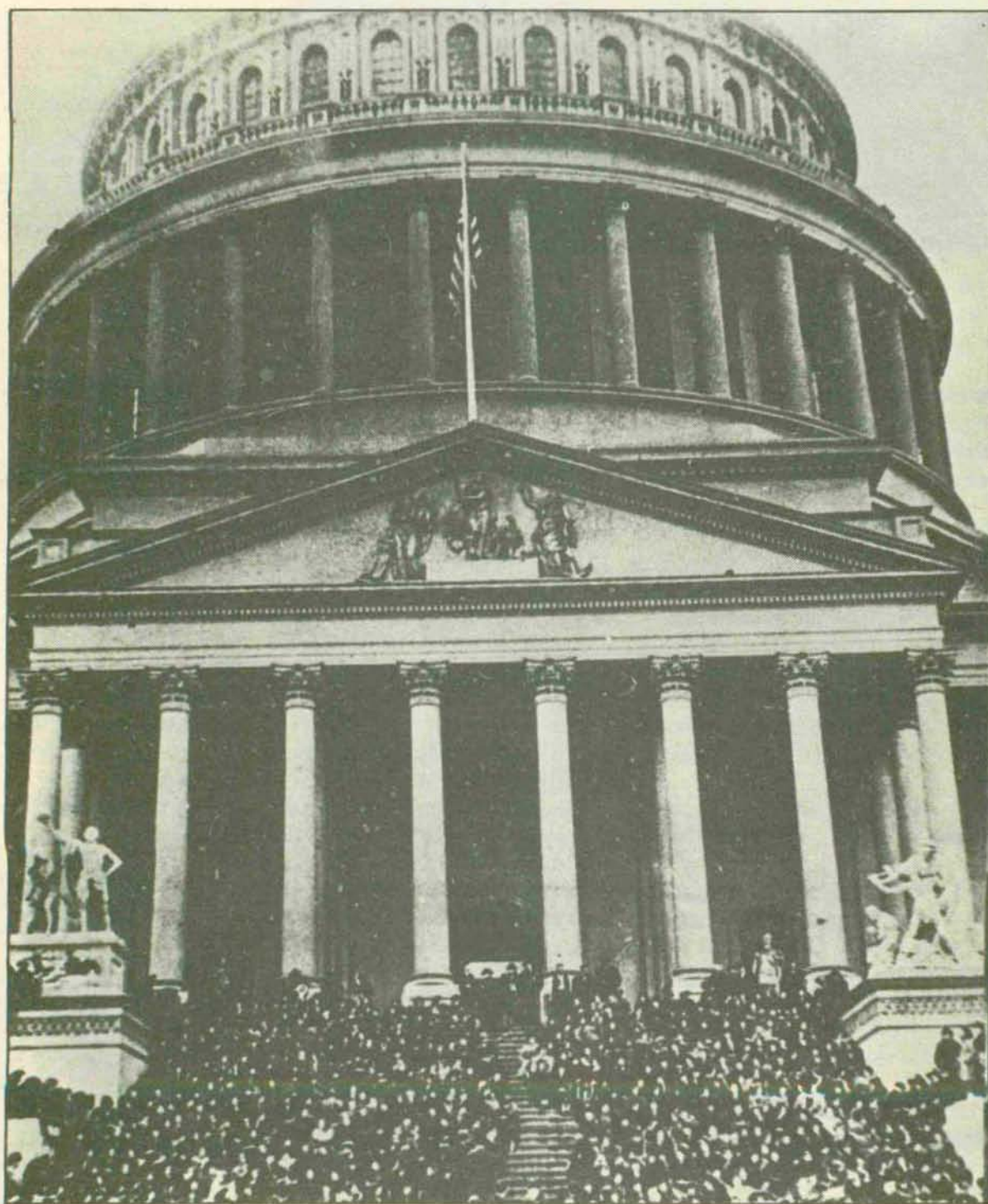


# La política norteamericana de “no intervención” en la Guerra Civil española, 1936-1939

Juan Durá



Manifestación ante el  
Capitolio, en  
Washington, en favor  
de la República  
española.



**L**AS relaciones diplomáticas entre los gobiernos de España y los EE. UU. durante los primeros años de la II República no puede decirse que fueran especialmente amistosas. Es más, durante la administración del Presidente Herbert Hoover (1928-1932), las relaciones entre los dos países fueron realmente pésimas. La imagen anticapitalista que proyectaba el gobierno español, con toda certeza alarmó a aquel tan ortodoxo defensor del más clásico capitalismo: el Presidente Hoover. Un personaje perteneciente a la misma escuela, el embajador norteamericano en Madrid, Irwin B. Laughlin, con su talante antiliberal y su actitud inflexible en una defensa a ultranza de los intereses y privilegios del capital norteamericano en España, no ayudaba demasiado a mejorar las relaciones entre los dos países. En este sentido las justas propuestas del gobierno de la Segunda República a la ITT norteamericana para la nacionalización de su filial en España, la Compañía Telefónica Nacional de España, poseedora del monopolio del sector en el país, y la aprobada legislación que regulaba las actividades de la banca extranjera en España, eran vistos por el embajador Laughlin como auténticas declaraciones de guerra al capital norteamericano en la península.

**N**AMPOCO ayudó mucho a mejorar las relaciones hispano - americanas la estrecha colaboración que habían mantenido los diplomáticos estadounidenses y algunos grandes grupos financieros americanos con los últimos gobiernos de la Monarquía española. Prueba de estas excelentes relaciones lo demuestra el hecho de que tres semanas antes de que cayera la Monarquía, el último gobierno de Alfonso XIII recibió un importante crédito de un poderoso consorcio financiero estadounidense (1).

La embajada norteamericana en Madrid facilitó esta importante operación de salvamento dando un informe muy favorable sobre la solvencia político - económica del régimen monárquico al grupo bancario envuelto en la operación. Evidentemente, esta ayuda económica, recibida en unos momentos históricos en

que la Monarquía se desmoronaba rápidamente, fue interpretada por los republicanos españoles como un intento desesperado por parte de la diplomacia y el capital norteamericano de salvar una institución que a principios del año 1931 parecía acabada. Así se puede observar que de la misma forma los republicanos españoles tenían buenas razones para desconfiar de las intenciones de la diplomacia norteamericana, los EE.UU. también tenían sus motivos para mostrarse un tanto hostiles a un régimen el cual creían estaba intentando terminar con las facilidades que la Monarquía les había dado para la penetración de su capital en España.

La derrota del republicano Herbert Hoover a manos del demócrata F. D. Roosevelt, trajo al fin un necesario cambio de embajadores lo cual ayudó a mejorar ligeramente las tirantes relaciones hispano-norteamericanas. En 1933, el

conservador Laughlin fue sustituido por un diplomático de talante más liberal. El nuevo embajador Claude Bowers, un demócrata de la escuela jeffersoniana, se hizo cargo de la embajada en Madrid, poniéndose rápidamente a trabajar con la idea de reparar en lo posible los daños causados a las relaciones hispano - norteamericanas por su antecesor. El punto más conflictivo entre los dos países seguía siendo las cuestiones económicas; cuestiones que siguieron creando problemas pese a la buena voluntad del nuevo embajador. Las negociaciones sobre la nacionalización de la CTNE tomaron visos de seriedad con la llegada de Bowers a España y aunque no se llegó a ningún acuerdo en concreto, el buen talante del embajador hacía alumbrar esperanzas de que el problema se podía resolver satisfactoriamente para las partes interesadas. Con todo esto, hay que observar que a pesar de la estancia de Bowers en España los pro-

(1) *New York Times*, 26 de noviembre de 1933.





Las primeras declaraciones públicas del Departamento de Estado hacia el conflicto civil iniciado en España el 18 de julio de 1936, fueron dirigidas a expresar la absoluta neutralidad de los EE.UU. con respecto a la lucha armada entre las fuerzas del Gobierno Republicano y las rebeldes dirigidas por el general Franco. (Julio Álvarez del Vayo, ministro de Estado, con el primer Gobierno de Largo Caballero, y que intervino muy destacadamente en el conflictivo asunto de la «No Intervención»).

blemas económicos continuaron enturbiando las relaciones entre los dos países. Esto nos induce a pensar que la tensión existente entre España y los EE.UU. durante este periodo no era causada por la presencia en el país de un diplomático de corte más o menos reaccionario, sino realmente por las diferencias objetivas que existían entre los intereses de una potencia poseedora de un imperio comercial con los intereses y valores de un régimen teóricamente popular como la II República española.

Poco antes de producirse el levantamiento militar que inició el conflicto civil en España, las relaciones entre españoles y norteamericanos no estaban definidas con claridad. Aparte de las relaciones comerciales entre los dos países, no existía en este periodo una política coherente por parte de la diplomacia norteamericana hacia los problemas que confrontaban al gobierno español. En el terreno diplomático, los EE.UU. se limitaron, cuando ello no afectaba directamente sus intereses, a seguir el camino de

la diplomacia inglesa. No obstante, tanto en el Departamento de Estado como entre ciertos grupos financieros y, naturalmente, sin olvidar la opinión pública, ya existían ciertas actitudes que en el futuro inmediato iban a tener una gran incidencia en los planteamientos norteamericanos hacia el conflicto armado en España. El Departamento de Estado, dirigido por el ex-juez sureño, el «Dixiecrat» Cordell Hull, mostró desde el primer momento una gran preocupación por lo que percibía como una falta de estabilidad política en España. Tampoco le agradaba demasiado a Hull la aparente falta de respeto demostrado por algunos líderes republicanos españoles hacia las prerrogativas de la propiedad privada, en este caso la norteamericana. Así, en sus memorias publicadas algunos años más tarde, Hull relata cómo el gobierno de la II República, según sus informes recibidos desde la embajada norteamericana en Madrid, entregaba armas a anarquistas y comunistas poco antes de iniciarse las hostilidades en julio de 1936 (2).

El impacto de esta imagen, totalmente aterradora para tan profundo enamorado de la ley y el orden como era el viejo ex-juez, incidió decisivamente en el planteamiento de la política norteamericana de no intervención hacia el conflicto civil en España. Si en el Departamento de Estado la reputación de la II República no era demasiado brillante, en los círculos económicos estadounidenses ésta era todavía peor. Los intentos de los republicanos españoles por conseguir una razonable autosuficiencia económica eran percibidos por los capitalistas

(2) Cordell Hull, *Memoirs* (New York, 2 volúmenes, 1948).



norteamericanos como amenazas latentes a sus intereses económicos en España. El conservadurismo tradicional del estamento económico norteamericano se tradujo por las circunstancias apuntadas en una postura totalmente hostil hacia el gobierno republicano español. Esta hostilidad se convirtió, al iniciarse la guerra civil en un apoyo abierto a las fuerzas rebeldes del general Franco. Contrario a la relativa unanimidad que encontramos en el estamento económico, la opinión pública en los EE.UU. se encontraba bastante dividida con respecto al conflicto en España. Por un lado, la inestabilidad política y la falta aparente de orden público durante los primeros años del régimen republicano, no ayudaron mucho a mejorar la imagen de éste ante los ojos de muchos ciudadanos norteamericanos. La quema de iglesias y los desórdenes callejeros, ampliamente difundidos por la conservadora prensa estadounidense, alienaron en grado sumo a gran parte de la comunidad católica del país, que hábilmente dirigida por el clero y la jerarquía, declaró una guerra abierta y sin cuartel contra la atea e incompetente II República. Por otra parte, existía en los EE.UU. una opinión bastante generalizada, en particular entre miembros de los sindicatos obreros, mundo cultural y artístico y en iglesias protestantes de varias denominaciones, que el peligro en España no radicaba en la falta de orden ni en la lucha socialismo - capitalismo, ni incluso en las diferencias religiosas, sino esencialmente en la esperada avalancha fascista (3).

(3) Allen Guttman, *The Wound in the Heart* (New York, 1962), y F. Jay Taylor, *The United States and the Spanish Civil War, 1936-1939* (New York, 1956),

Si en el orden de política interna existían los condicionamientos apuntados, condicionamientos que indudablemente incidían en el planteamiento de la línea a seguir por los EE.UU. hacia la situación en España, en el plano externo la situación mundial no podía dejar de afectar esta política de la misma forma. Es evidente que en el verano de 1936 los EE.UU. se encontraban profundamente preocupados por la creciente agresividad mostrada por Hitler y Mussolini, así como por la aparente pasividad de Francia e Inglaterra ante el creciente expansionismo de los dictadores fascistas. No hay duda que

*ofrecen un buen análisis de la división causada por la guerra civil española en la sociedad norteamericana.*

la política de apaciguamiento seguida por las democracias europeas hacia Italia y Alemania influyó de gran manera en los planteamientos de la política norteamericana hacia Europa en general y hacia España en particular. Esta situación coyuntural tuvo un efecto bastante profundo en las relaciones hispano - norteamericanas durante la guerra civil en España. Hechos como la invasión italiana de Etiopía y el subsecuente fallo de las democracias europeas de prestar ayuda alguna a los desesperados etíopes no ayudaron excesivamente a que los norteamericanos rompieran con su tímida posición diplomática. Si a las continuas provocaciones de Hitler y Mussolini y a la pasividad de



No hay duda que la política de apaciguamiento seguida por las democracias europeas hacia Italia y Alemania influyó de gran manera en los planteamientos de la política norteamericana hacia Europa en general y hacia España en particular. (Franklin Delano Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, durante nuestra guerra civil).



Francia e Inglaterra en responder a éstas, añadimos la inestabilidad política imperante en el país galo, azotado en 1936 por graves enfrentamientos políticos que dificultaban en gran manera la adopción de una política exterior coherente y sin ambigüedades, comprenderemos cómo la política de apaciguamiento seguida por Francia e Inglaterra afectó sensiblemente el espacio de maniobra de la administración Roosevelt hacia el naciente conflicto bélico en España.

#### ORIGENES Y EVOLUCION DE LA POLITICA NORTEAMERICANA DE NO INTERVENCION: 1935-1937

Durante los años 1935 y 1936 un importante debate conmo-

vió a la opinión pública norteamericana. El debate se centró principalmente en las causas que arrastraron a los EE.UU. a participar en la I Guerra Mundial. Después de interminables investigaciones y debates en el Senado y Congreso de los EE.UU. se llegó a la conclusión de que verdaderamente y como se sospechaba, fueron los fabricantes de armamentos, los llamados «mercaderes de la muerte», los que jugaron un papel preponderante en facilitar la entrada estadounidense en la primera conflagración mundial (4). Los resultados de esta

(4) Robert A. Divine, *The Illusion of Neutrality* (Chicago, 1962). El estudio que desencadenó el debate sobre los «mercaderes de la muerte», por F. C. Hahnighen, *Merchants of Death: A study of the International Armament Industry* (New York, 1934) es un libro muy importante, tanto por lo provocativo de su tesis como por el impacto que tuvo en la legis-

investigación indudablemente estimularon un sentimiento de unanimidad entre dirigentes y opinión pública que la venta de armamentos y otros pertrechos de guerra a beligerantes en conflictos de aspecto global debían de prohibirse por legislación. No obstante, esta unanimidad desaparecía en el momento que se discutía la posibilidad de una política de neutralidad completa. Como es natural, ese tipo de neutralidad conllevaba el embargo, no sólo de armamentos y pertrechos de guerra, sino también de productos industriales y semi-industriales, así como de productos energéticos.

La investigación sobre las actividades de los «mercaderes de la muerte», dirigida por el senador Gerald Nye, no sólo lación neutralista aprobada por el Congreso de los EE.UU. en 1935 y 1936.



Mantener cualquier esperanza en la posibilidad de obtener materiales de guerra en los EE.UU. durante el verano de 1936 era de una ingenuidad a toda prueba, sobre todo si tenemos en cuenta la situación política interna que imperaba en aquellos momentos en el país. (Acto en favor de los republicanos españoles, en Nueva York).



tuvo un gran impacto en la opinión pública norteamericana, sino que incluso condicionó perceptiblemente el volumen de ventas de los fabricantes de armas durante este período. Tal fue el impacto de esta investigación en la sociedad estadounidense que incluso los estamentos más expansionistas aceptaron la necesidad de una legislación que prohibiera la venta de armas a naciones envueltas en conflictos globales. Con respecto a la inclusión en dicha legislación de ciertos productos manufacturados y semiprocesados, así como de productos petrolíferos, tan buscados por muchos beligerantes como el material militar, el consenso no era tan amplio. El senador Nye comprendió con exactitud la falta de consenso en la materia cuando afirmó que: «Creo que un embargo completo, comercio incluido, ofrece la única garantía absoluta de evitar que los EE.UU. se vean envueltos de nuevo en otra larga guerra con las grandes potencias. Estoy convencido que una legislación drástica al respecto no sería aceptada por el Congreso, incluso ni en tiempos de paz» (5). Era obvio que, tanto para los grupos económicos como para el Departamento de Estado, la idea de un embargo total aparecía en estos momentos como algo realmente impensable. Tal embargo, según estos dos estamentos, dañaría enormemente los intereses económicos y estratégicos de los EE.UU., retrasaría la esperada recuperación económica y, finalmente, podría interferir con los planes de penetración económica tan cuidadosamente trazados por la administración del Presidente Roosevelt.

(5) William A. Williams, *The Tragedy of American Diplomacy* (New York, 1959), p. 187.



Al no existir unanimidad en el Gobierno del F.P.F. sobre la posible ayuda francesa al Gobierno de la II República Española, era evidente que el Premier francés, León Blum (en la foto), no tendría más remedio que adoptar una política de no intervención si quería mantener intacta la coalición frente-populista hasta las próximas elecciones.

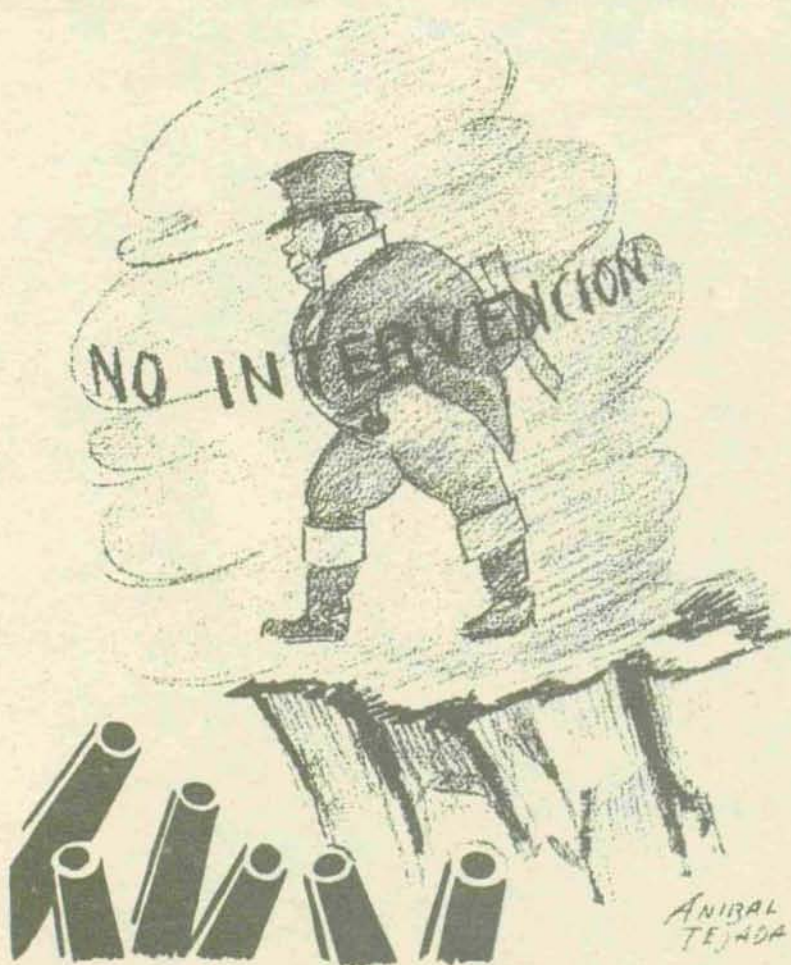
El senador Nye tenía aparentemente muy buenas razones para deducir tales conclusiones: el Secretario de Estado Cordell Hull, así como muchos miembros de su departamento, mantenían que tales restricciones en el comercio exterior del país ejercerían unos efectos extremadamente negativos e incluso desastrosos sobre la economía norteamericana. Planteamientos similares eran defendidos por la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso de los EE.UU. Lógicamente, la libertad de comerciar con productos no militares la defendían

con el máximo empeño los grupos financieros e industriales. El Presidente de la Cámara de Comercio de New York advirtió al propio Presidente Roosevelt que los «exportadores y comerciantes de todos los puertos del Este están hoy más interesados que nunca en la libertad de comercio» (6). El mismo punto de vista era defendido por la General Motors, la gigante firma exportadora de algodón Anderson & Clayton y el Departamento de Comercio, entre otros estamentos econó-

(6) *Idem*, p. 189.



## LA CARICATURA DEL DÍA



¿SE DESPEJARA A TIEMPO LA NEBULOSA?

Aparentemente el gobierno Conservador, entonces en el poder en Gran Bretaña, creía que la II República era incapaz de ofrecer la estabilidad política necesaria para que los intereses británicos en la península no se vieran amenazados.

micos norteamericanos. Uno de los líderes más significativos del Senado, Key Pittman, afirmó en 1936 que «la necesidad de exportar es tan grande y la presión política tan fuerte que no es muy realista esperar ninguna legislación neutralista que prohíba las exportaciones no militares a países beligerantes» (7).

Es dentro del contexto general de este debate en el cual hay que analizar el Decreto de Neutralidad de 1935, por el cual se prohibía la venta de armamentos y otros implementos de guerra a naciones en-

vueltas en conflictos armados, así como el Decreto de Neutralidad de 1936, que prohibía la concesión de créditos a naciones en estado de guerra o a las que se integraban al conflicto una vez iniciado éste. Como se puede fácilmente observar, ninguno de estos decretos prohibía la venta de materiales no militares ni tampoco especificaba nada sobre la incidencia de estos decretos de neutralidad con respecto a conflictos civiles.

Las primeras declaraciones públicas del Departamento de Estado hacia el conflicto civil iniciado en España el 18 de julio de 1936 fueron dirigidas a

expresar la absoluta neutralidad de los EE.UU. con respecto a la lucha armada entre las fuerzas del gobierno republicano y las rebeldes dirigidas por el general Franco. En el plano legal, al no existir ninguna cláusula en los decretos de neutralidad aprobados por el Congreso en 1935 y 1936 que prohibieran la venta de armamentos y otros pertrechos de guerra a los contendientes en conflictos civiles, el Departamento de Estado optó por anunciar un «embargo moral» en material militar a los contendientes españoles. Los responsables de la política exterior norteamericana esperaban que este «embargo moral», al no tener ninguna fuerza jurídica, sería puesto a prueba a la primera oportunidad. Esto ocurrió el 10 de agosto de 1936, cuando el Departamento de Estado recibió una notificación de la compañía de aviación Glen L. Martin, inquirendo sobre la actitud del departamento con respecto a la posibilidad de que la compañía vendiera 8 aviones al gobierno republicano español. La respuesta del Departamento de Estado, así como la correspondencia y las llamadas telefónicas que se produjeron entre miembros de la administración Roosevelt para redactar una respuesta que pudiera establecer un precedente, delinean con bastante claridad la posición del gobierno norteamericano hacia la contienda en España.

Sólo cinco días antes de recibir la consulta de la compañía de aviación Martin, el Subsecretario de Estado William Phillips, que se encontraba al mando del departamento por vacaciones de su titular, Cordell Hull, había afirmado que «los republicanos tienen esencialmente un gobierno comunista» (8). Seguidamente Phil-

(7) *Idem*, p. 189.

(8) William Phillips, *Diario*, Biblioteca



lips expresó una concepción del conflicto que se estaba desarrollando en España que recogía de una forma bastante exacta una opinión generalizada entre los dirigentes del Departamento de Estado: «La parte crítica de la situación en España es que si el gobierno gana, como ahora parece probable (agosto, 1936), el comunismo en Europa se vería inmensamente estimulado» (9).

Al anticomunismo de Phillips hay que añadirle, evidentemente, una buena percepción sobre el efecto negativo que una victoria republicana podría tener en los intereses de los EE.UU. en España. La postura de Phillips también estaba reforzada por su intuición de que si los EE.UU. se vieran obligados a permitir la compra de armas a los contendientes españoles y las democracias europeas se negaran a secundar a los norteamericanos, estos últimos se convertirían con toda seguridad en los proveedores exclusivos de los republicanos españoles. En la respuesta del Departamento de Estado a la compañía Martin todos estos razonamientos se tuvieron en cuenta. Después de varias conversaciones telefónicas entre Phillips, Hull y Roosevelt, la compañía Martin fue informada por el gobierno estadounidense que la venta de aviones al gobierno español no se ajustaría con exactitud al espíritu de estricta neutralidad que los EE.UU. mantenían hacia el conflicto en España (10). Si a consideraciones de tipo político añadimos condicionamientos ideológicos y estratégicos, el intento republicano de adquirir armas y aviones en los EE.UU. parecía abocado al fracaso.

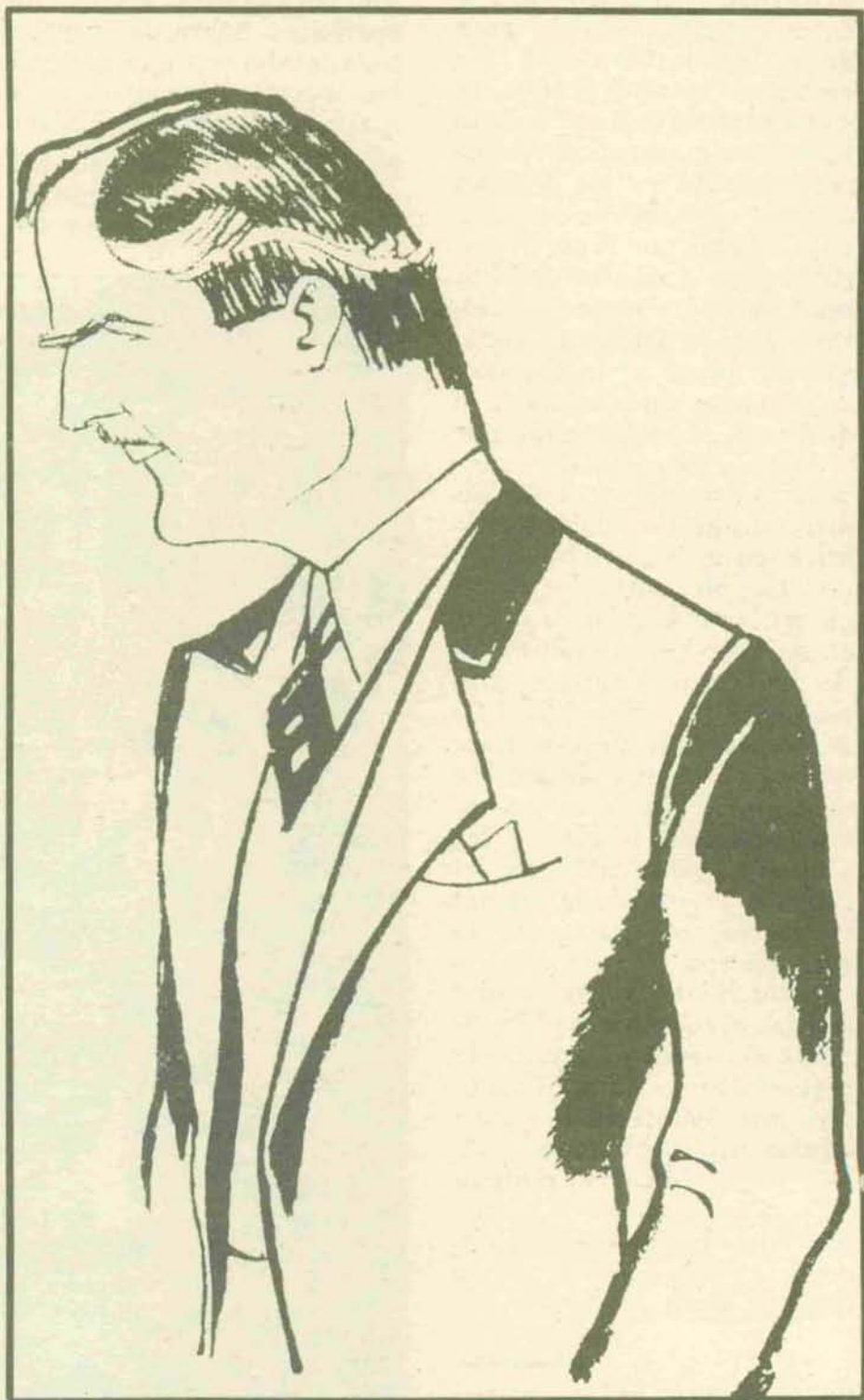
*Houghton en la Universidad de Harvard, agosto 3 y 4 de 1936.*

(9) *Idem*, agosto 3 y 4 de 1936.

(10) *Idem*, agosto 11 de 1936.

Mantener cualquier esperanza en la posibilidad de obtener materiales de guerra en los EE.UU. durante el verano de 1936 era de una ingenuidad a toda prueba, sobre todo si tenemos en cuenta la situación política interna que imperaba en aquellos momentos en el país.

En el verano de 1936, con las elecciones presidenciales a tres meses vista, la situación política en los EE.UU. tuvo una marcada incidencia en la dinámica de la política exterior norteamericana. Abogados republicanos y demócratas en la encarnizada lucha electoral, cualquier desliz con



El 29 de octubre de 1936, el Secretario del Foreign Office, Anthony Eden (en la imagen), dijo ante el Parlamento británico refiriéndose al Comité de No Intervención, que este había sido como «una improvisada barrera de seguridad» y que «en general había reducido el peligro de una guerra europea».



respecto al tema de la neutralidad en España les podía costar bastante caro políticamente. La campaña electoral se estaba desarrollando hasta aquellos momentos sin grandes contratiempos para el Presidente Roosevelt y era aparente que, salvo un cataclismo político, sólo tenía que mantener la coalición que le llevó al poder en 1932 para ganar tranquilamente las elecciones presidenciales de 1936. Parte de esta coalición la formaban los grupos étnicos concentrados en los grandes centros urbanos de la zona Este del país, con la particularidad de que muchos de ellos eran mayoritariamente católicos. Estos grupos, que como anteriormente apuntábamos, se habían escandalizado de la quema de conventos e iglesias y de los asesinatos de sacerdotes y monjas durante los primeros años de la II República, en agosto - septiembre de 1936, bien dirigidos por el clero y las jerarquías católicas en sus respectivas comunidades, ejercieron una gran presión política sobre el partido demócrata para que éste mantuviera su política de estricta neutralidad hacia la guerra civil española. El clero y las altas jerarquías católicas, así como la prensa de la misma tendencia, especialmente la gran cadena de periódicos y revistas Hearst, pusieron una intensa presión sobre el Presidente Roosevelt —al que se le sospechaban algunas simpatías pro-republicanas— para que no sintiera ninguna tentación de modificar su política de «embargo moral» a los beligerantes españoles. El clero desde el púlpito y la prensa católica desde la plataforma

de sus periódicos y revistas, presentaron la guerra civil española como un conflicto entre el bien y el mal. El bien, representado por los conceptos de la familia, la religión, el orden público y la propiedad privada, entre otros. El mal, representado por la anarquía, el ateísmo y el comunismo, sólo por nombrar los más importantes. Sobra decir que el bien estaba representado por las fuerzas franquistas y el mal por el bando republicano.

Es evidente que con este planteamiento el catolicismo había abandonado toda preten-

sión de tomar una postura neutral con respecto al conflicto español. Esto tuvo una gran importancia para las fuerzas de Franco, ya que los católicos norteamericanos, una vez constituidos en un poderoso grupo de presión, consiguieron, gracias a su coherencia y organización, desbaratar cualquier intento de modificar la política de «embargo moral». De esta forma el catolicismo estadounidense puso su granito de arena para que el gobierno de la II República no pudiera obtener en los EE.UU. los materiales de guerra que le



Hay que mencionar a los 3.000 voluntarios del batallón Lincoln, que integrados en las Brigadas Internacionales, lucharon en el lado republicano. (Llegada a España de los primeros norteamericanos; Barcelona, 6 de enero de 1937).



eran tan vitalmente necesarios (11).

A los condicionamientos de política doméstica, hay que añadir los ejercidos por cuestiones relacionadas con la política exterior de los EE.UU. En este caso nos estamos refiriendo al importante triángulo de relaciones entre los EE.UU., Francia e Inglaterra. Considerando la naturaleza de tales relaciones, es evidente que la política norte-

americana hacia el conflicto español no podía separarse demasiado de la línea franco-británica. El impacto de la política de las dos democracias europeas en la dinámica de la política de los EE.UU. durante este período quizás merezca un pequeño «detour» que nos muestre las reacciones de franceses e ingleses al conflicto en España.

En el caso específico de Francia, este país se encontraba en 1936 envuelto en una aguda crisis socio-política. Esta circunstancia indudablemente impedía que el gobierno fran-

cés actuara con firmeza y coherencia en su política exterior. Aparte de esa debilidad interior, que incidió grandemente en la postura de apaciguamiento seguida por Francia hacia los fascismos europeos, hubo dos consideraciones, una de tipo estratégico y otra de índole económica que incidieron notablemente en el planteamiento de la política francesa hacia el conflicto español. En el plano estratégico, un triunfo de las fuerzas republicanas hubiera significado para la burguesía francesa una victoria disimulada del comunismo, lo cual indudablemente tendría implicaciones adversas para los intereses franceses en el Mediterráneo y África. Controlando aproximadamente el 60 por 100 de las inversiones extranjeras en España, un cambio revolucionario activado por una victoria republicana, no sólo plantearía a la burguesía gala problemas de tipo económico, sino también de índole política. A estas dos particularidades hay que añadir los problemas internos que el conflicto en España estaba causando a la coalición del Frente Popular Francés. Aunque la base del FPF estaba compuesta mayoritariamente por la clase trabajadora, el balance de la coalición lo mantenían los Radicales, que representaban un sector de la pequeña burguesía francesa.

Al no existir unanimidad en el gobierno del FPF sobre la posible ayuda francesa al gobierno de la II República Española, era evidente que el Premier francés, León Blum no tendría más remedio que adoptar una política de no intervención si quería mantener intacta la coalición frente-populista hasta las próximas elecciones. Ayudar abiertamente a las fuerzas republicanas equivaldría a antagonizar

(11) Allen Guttman, *The Wound in the Heart*, y J. M. S. Downes, Jr., *American Editorial Opinion and the Spanish Civil War* (tesis del M. A. sin publicar. Univ. Calif. Berkeley, 1950).





a un amplio sector de las clases medias francesas, de esta forma condenando prácticamente al FPF a una derrota segura en las elecciones venideras. En este contexto y valorando los intereses, tanto económicos como estratégicos de la burguesía francesa, así como los condicionamientos de política interna a que nos hemos referido, resultó casi lógico que el gobierno de Blum se decidiera por la neutralidad. En la práctica, dicha neutralidad sólo ayudó a las fuerzas rebeldes del general Franco, ya que mientras los envíos de material móvil y otros productos destinados a

las fuerzas republicanas eran retenidos en la frontera franco española, los suministros destinados a las huestes franquistas procedentes de Alemania y del puerto de Amberes, eran despachados con toda celeridad por los empleados de la aduana francesa (12). Inglaterra como Francia fundamentó su política hacia España en dos consideraciones básicas: una de tipo estratégico-militar y otra de índole económica. Los ingle-

(12) Patricia A. M. van der Esch, *Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War* (The Hague, 1951), y Elizabeth Monroe, *The Mediterranean in Politics* (London, 1939).

ses consideraban que su libre acceso al Mediterráneo era materia vital para sus intereses económicos y militares, de ahí que una España estable e independiente era tan importante para Inglaterra. Aparentemente, el gobierno Conservador entonces en el poder creía que la II República era incapaz de ofrecer la estabilidad política necesaria para que los intereses británicos en la península no se vieran amenazados; por eso preferían un gobierno de derechas. En este sentido el gobierno de su Graciosa Majestad no se vio afectado de ningún complejo de culpabilidad como el que



En el verano de 1936, con las elecciones presidenciales a tres meses vista, la situación política en los EE.UU. tuvo una marcada incidencia en la dinámica de la política exterior norteamericana. (Olimpiada de Barcelona, durante el verano del 36: la representación norteamericana).





A finales de 1936 era evidente que la política norteamericana de «embargo moral» iniciada al comienzo de las hostilidades en España no podía permanecer efectiva de forma indefinida. (El general Foqua, agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos, pasando revista a las tropas norteamericanas de voluntarios en España).

afectó al Frente Popular Francés al ver que no podía ayudar a sus homónimos frente-populistas españoles en su lucha contra el fascismo. Es más, antes de finalizar el año 1936 había suficiente evidencia, indicando que el gobierno inglés no estaba demasiado preocupado por una posible victoria franquista. Los servicios de inteligencia ingleses habían llegado a la conclusión que en el caso de producirse una victoria rebelde, el general Franco no haría concesiones estratégicas importantes a las potencias que le estaban ayudando a ganar la guerra: Alemania e Italia (13). De esta forma, la independencia de España, aparentemente tan importante para los planteamientos estratégicos ingleses, quedaba asegurada.

Es fácil observar que tanto

(13) Informe de Claude Bowers al Secretario de Estado, Documentos del Departamento de Estado, octubre, 21, 1936, 852.00/3644 y DDE, diciembre 1, 1936, 852.00/4063.

Francia como Inglaterra tenían intereses en España, los cuales apuntaban bastante más allá del conflicto civil. En este contexto, el inoperante (inoperante porque hubo intervención italo-germana al lado de Franco y ayuda soviética al lado republicano) Comité de No Intervención cumplió para franceses y británicos la importante función de localizar el conflicto bélico en tierras españolas. Naturalmente, la «localización» del conflicto en España, con el objetivo de reducir el peligro de una posible conflagración mundial, forzaba a las democracias occidentales a adoptar una estrategia de apaciguamiento con respecto a las acciones agresivas de la Alemania nazi (14). Lo único que consiguieron franceses y británicos con esta estrategia fue retrasar el comienzo de la se-

(14) Informe de James Dunn, Jefe de la División Europea del Dpto. de Estado, noviembre 2, 1936, DDE, 811.71247/69.

gunda guerra mundial. El 29 de octubre de 1936, el Secretario del Foreign Office, Anthony Eden, dijo ante el Parlamento británico, refiriéndose al Comité de No Intervención, que éste había sido como «una improvisada barrera de seguridad» y que en «general había reducido el peligro de una guerra europea» (15).

Si analizamos la política franco - británica hacia la guerra civil española y la comparamos con la norteamericana, podremos observar una gran similitud en los principales preceptos que guiaban la política de las tres democracias occidentales. No hay duda que la política de neutralidad seguida por Francia e Inglaterra condicionó la postura norteamericana y cabe elucubrar que en el hipotético caso de que las dos potencias europeas hubieran

(15) The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon: Facing the Dictators (Cambridge, Mass. 1962), p. 463.



# OUR FIGHT

## THIS YEAR - THE FINAL VICTORY OVER FASCISM

RESOLVED



Peace  
On Earth  
Good Will  
To Men

En los informes del embajador norteamericano Bowers, éste expresaba su profundo convencimiento de que tanto Francia como Inglaterra deseaban la victoria de Franco porque ello indudablemente beneficiaría sus intereses económicos y estratégicos en España. (Portada de la publicación de la XV Brigada, Batallón Lincoln).

ayudado, o por lo menos permitido la compra de material de guerra de sus fábricas a los republicanos, los EE.UU. seguramente se habrían visto forzados a corresponder con la misma línea de acción. No habiéndose producido esta especie de mutación histórica, los EE.UU. fundamentaron su política de no intervención, tanto en el modelo franco-británico como en los condicionamientos de índole política y económico-estratégicos mencionados anteriormente. La política norteamericana de no intervención se consolidó aún con más fuerza al recibir

el Departamento de Estado los informes del embajador norteamericano ante la II República Española, Claude Bowers. En estos informes Bowers expresaba su profundo convencimiento de que tanto Francia como Inglaterra deseaban la victoria de Franco porque ello indudablemente beneficiaría sus intereses económicos y estratégicos en España. Si el análisis de Bowers era cercanamente correcto, parecía lógico que la ayuda norteamericana que los republicanos buscaban con tanto ahínco no llegaría nunca. Si nos guiamos por los plantea-

mientos del Secretario de Estado, Cordell Hull y de su subsecretario William Phillips, para los EE.UU. era evidente que un gobierno de derechas en España, incluso de signo fascista, no amenazaba sus intereses tanto como podría hacerlo uno de izquierdas (16).

A finales de 1936 era evidente que la política norteamericana de «embargo moral» iniciada al comienzo de las hostilidades en España no podía permanecer efectiva de forma indefinida. Parece realmente insólito que hasta finales de 1936 nadie pusiera a prueba esta política, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación en que se encontraban muchas unidades republicanas por falta de armas. Quizás la respuesta a este enigma haya que buscarla en el temor de los simpatizantes y diplomáticos republicanos en los EE.UU. a provocar al gobierno norteamericano a buscar una legislación que prohibiera la venta de armas a los contendientes españoles, de esta forma convirtiendo el ambiguo «embargo moral» en un fatídico embargo legal.

No obstante y quizás provocado por la gran necesidad de adquirir armas y aviones, especialmente de bombardeo, para el ejército republicano, el gobierno de la República decidió correr el peligro y por medio de varios intermediarios encargó armas y aviones por valor de varias decenas de millones de dólares. Así, el 29 de diciembre los periódicos del país anunciaban a toda página la concesión por el Departamento de Estado de dos licencias de exportación al empresario Robert L. Cuse, apodado el «chatarrero de

(16) John Bowyer Bell, *The Non-Intervention Committee and The Spanish Civil War*, tesis doctoral sin publicar, Duke Univ., 1958; Dante A. Puzzo, *Spain and the Great Powers, 1936-1941* (New York, 1962).



New Jersey». La concesión de estas licencias, que permitirían a Cuse la venta al gobierno republicano de 18 aviones completos, 411 motores de avión y piezas sueltas suficientes para montar 150 motores más, era un puro trámite administrativo, al cual el Departamento de Estado no tenía más remedio que dar curso oficial (17). Los temores expresados por los dirigentes del Departamento de Estado finalmente se habían materializado. El «embargo moral» resultó como ellos esperaban, un tigre de papel: ahora habría que convertirlo en uno con dientes de verdad. El mismo día que el Departamento de Estado autorizó las licencias de exportación al «chatarrero de New Jersey»,

(17) *New York Times*, 25 de diciembre de 1936.

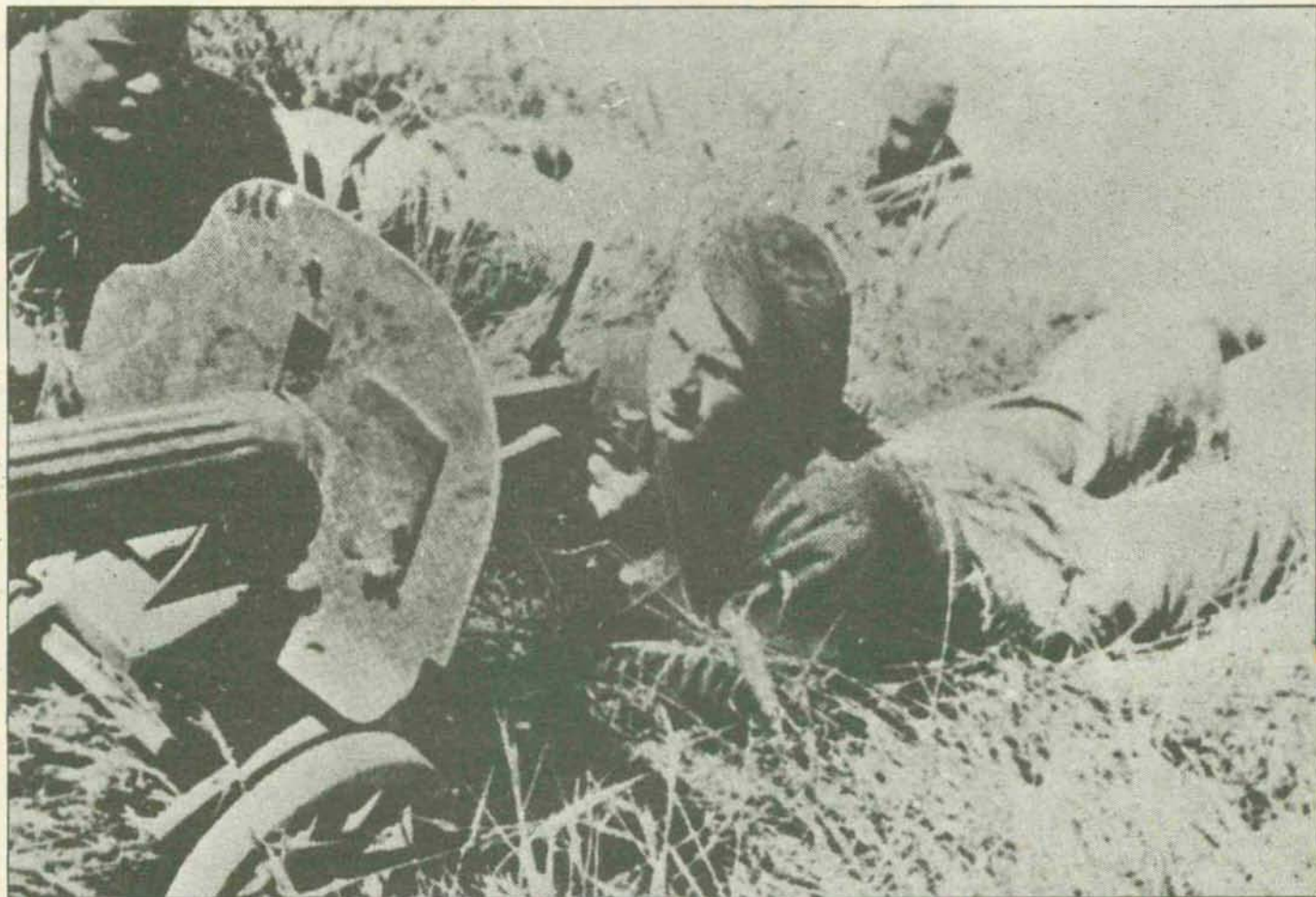
empezaron a producirse contactos entre miembros del gobierno, Roosevelt incluido, y miembros del Congreso y Senado, con el objeto de ir preparando una legislación que prohibiera la venta de armas y aviones a los contendientes españoles. Los contactos entre Roosevelt y el senador Key Pittman, Presidente del poderoso Comité de Asuntos Exteriores del Senado, resultaron en un acuerdo por el cual Pittman se comprometía a conseguir la aprobación por el Senado de una enmienda a la legislación existente por la cual se autorizaría al Presidente imponer a su discreción embargos de armamentos a países envueltos en conflictos civiles (18).

Este acuerdo se vio perturbado durante la última se-

(18) *Idem*, 30 de diciembre de 1936.

mana de diciembre por dos acontecimientos que produjeron algo de confusión en los planes del Presidente y senador. El primero de ellos fue la solicitud de un nuevo permiso de exportación al Departamento de Estado que, como el de Cuse, iba a ser usado para exportar armas a los republicanos españoles. El solicitante del permiso fue un tal Richard L. Dinely, hombre bastante ligado negocios turbios y que aparentemente se movía con mucha frecuencia en los bajos fondos del hampa neoyorquina (19). El otro acontecimiento fue causado por la prontitud con que se movió Robert L. Cuse, el «chatarrero de New Jersey», para que el barco cargado de aviones y

(19) Richard Traina, *American Diplomacy and the Spanish Civil War* (Bloomington, Indiana, 1968), pp. 8-9-92.



Parece realmente insólito que hasta finales de 1936 nadie pusiera a prueba la política norteamericana de no intervención, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación en que se encontraban muchas unidades republicanas por falta de armas. (Ametralladora del Batallón Lincoln, actuando en la batalla de Belchite).

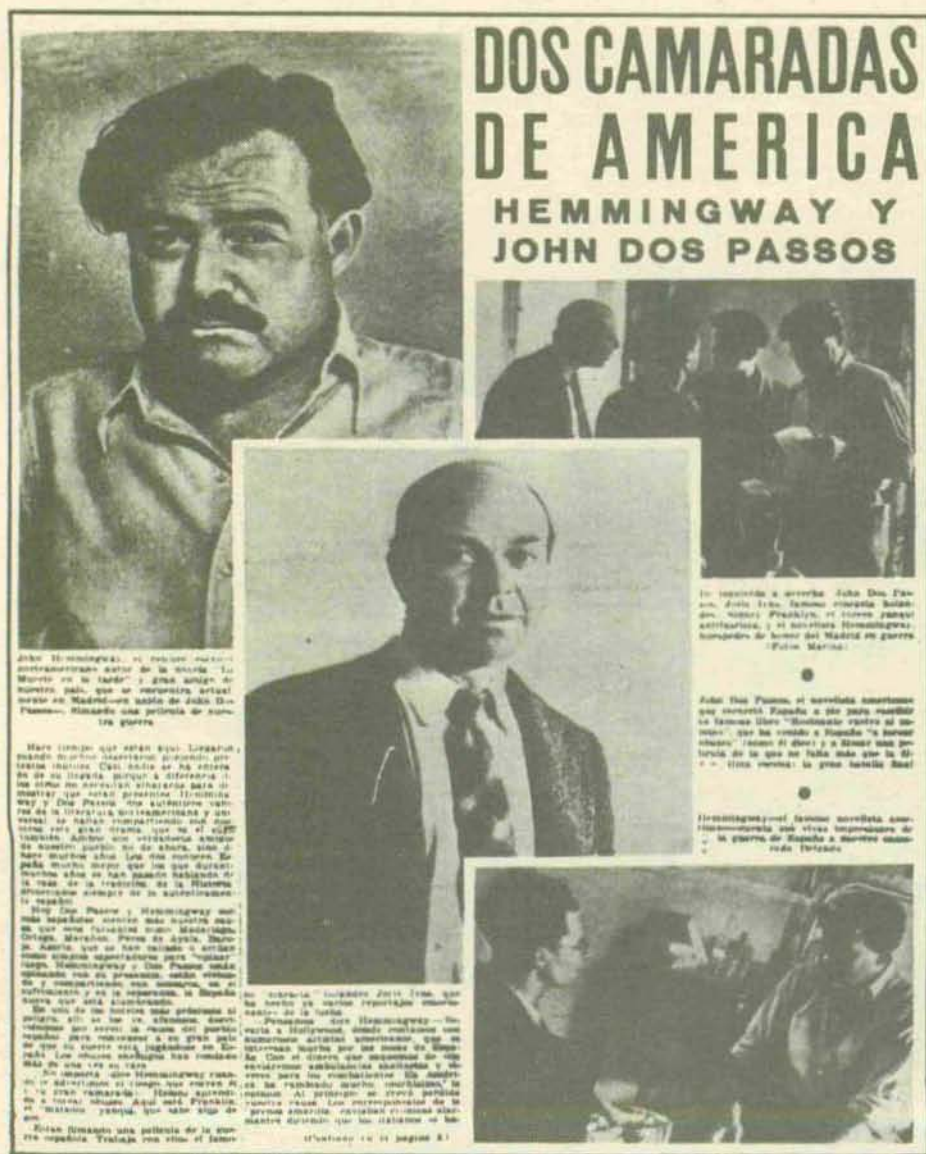


motores destinados al ejército republicano zarpara del puerto de New York antes de que se produjera cualquier legislación que pudiera interferir con su envío. De esta forma, la rutinaria concesión por el Departamento de Estado del correspondiente permiso de exportación a Dinely el 5 de enero de 1937, unido a la prisa de Cuse por zarpar del puerto de New York, produjeron un cambio en la estrategia de Roosevelt y Pittman para obtener del Congreso una rápida legislación que prohibiera la venta de armas a contendientes en guerras civiles. Según Pittman, la aprobación por

todo el Congreso de una resolución prohibiendo la exportación de armas y otros implementos de guerra a países envueltos en conflicto civil y que, además, autorizara al Presidente a usar discrecionalmente sus poderes en la materia, no podía en aquellos momentos pasar las dos Cámaras del Congreso con la celeridad necesaria para evitar que Cuse y Dinely consiguieran mandar sus cargamentos de armas y aviones al gobierno de la II República Española. En sus discusiones con miembros de la administración Roosevelt, Pittman argumentó que debido a la re-

sistencia que la cláusula otorgándole poderes discrecionales al Presidente podía causar en el Senado y Congreso, la lucha por pasar la resolución completa sería dura y prolongada, lo cual seguramente permitiría a Cuse, Dinely y a otros comerciantes como ellos, vender materiales de guerra a los republicanos españoles. El descalabro que esto podía causar a la política norteamericana de no intervención podía ser bastante serio.

Era evidente que para evitar tal descalabro los dirigentes norteamericanos no tenían otra alternativa que actuar con toda celeridad para encontrar una fórmula que pudiera ser aceptada tanto por la administración Roosevelt como por el Senado y Congreso. Con el tiempo justísimo —Cuse consiguió sacar su cargamento del puerto de New York— una fórmula aparentemente aceptable para el ejecutivo y la legislatura fue presentada por el Departamento de Estado. Esta fórmula omitía cualquier mención acerca de poderes discrecionales para el Presidente, limitándose el lenguaje de la resolución presentada al caso específico de la guerra civil en España. Esta resolución fue aceptada por el Senado y Congreso después de un rápido debate en las dos Cámaras y al día siguiente, 8 de enero de 1937, el Presidente Roosevelt fijaba su firma en el decreto, prohibiendo la venta y transporte de armas u otros implementos de guerra a los beligerantes del conflicto en España. Algunos días más tarde, el general Franco públicamente felicitaba al gobierno de los EE.UU. por la rúbrica legal que le había dado a su bien intencionada pero inoperante «embargo moral». Con esta «brillante» actuación diplomática, Franco vindicaba



El 8 de enero de 1937, el Presidente Roosevelt fijaba su firma en el decreto prohibiendo la venta y transporte de armas u otros implementos de guerra a los beligerantes del conflicto en España. (Portada de la revista «Ahora», 1937).





Mandos de la XV Brigada; de izquierda a derecha: Capitán Oliver Law, Jefe del «Washington», primer negro al mando de una unidad de blancos; Capitán Gabriel Fort, francés; Capitán Fred Copeman, inglés; Mayor Allan Johnson, estadounidense.

plenamente a los pocos senadores y congresistas que se habían opuesto al embargo legal, ya que, según éstos, tal embargo sólo podía ayudar a las fuerzas rebeldes (20).

### LA AYUDA NORTEAMERICANA A LOS CONTENDIENTES

El tema de la ayuda norteamericana a los contendientes en el conflicto civil español ha sido seguramente uno de los más discutidos y polémicos en la historiografía del tema. Esta polémica no se centra exclusivamente en la cantidad y calidad de los materiales de guerra que cada uno de los be-

ligerantes recibieron procedentes de los EE.UU., sino que abarca hasta la incidencia que tuvieron estos materiales en la evolución y resultado final de la guerra civil. Con respecto a la cantidad es evidente que al constatar las cifras de material norteamericano recibido por los bandos beligerantes españoles, el ejército de Franco recibió la mayor parte del material. El material recibido por los republicanos se limitó a algunos aviones que consiguieron penetrar el bloqueo vía México, así como unos 3.000 vehículos de motor. El envío más importante de aviones fue el efectuado por la compañía Grumman Aircraft Engineering Corp., que, utilizando una astuta estrata-

gema, consiguió burlar el embargo poniendo 50 aparatos en España (21). El famoso cargamento que provocó el embargo legal de los EE.UU. a los beligerantes en España, fletado por el «chatarrero de New Jersey», y compuesto por 18 aviones, 411 motores y piezas para montar 150 aparatos, nunca llegó a su destino, ya que el barco que transportaba el material fue capturado por la armada franquista. Por otra parte, hay que mencionar a los 3.000 voluntarios del Batallón Lincoln, que integrados en las Brigadas Internacionales, lucharon en el lado republicano.

(21) DDE, 711.00111 lic. Grumman Aircraft Corp., Arms Traffic; y DDE 711.00111 lic. Brewster Aeronautical Corp., Arms Traffic.

(20) *Idem*, p. 94.



Esto es, en líneas generales, lo que recibieron los republicanos españoles de los EE.UU. (22).

En el apartado de «ayuda» norteamericana, Franco tuvo un poco más de suerte que el lado republicano, ya que al estar casi abastecido de armas y otros materiales de guerra por Alemania e Italia, pudo concentrar su esfuerzo en la obtención en los EE.UU. de elementos tan vitales para un esfuerzo bélico como vehículos de motor y productos petrolíferos; productos éstos que no se encontraban entre los embargados. Indudablemente, si estos productos hubieran estado incluidos en la legislación anti - intervencionista aprobada por el Congreso estadounidense, como algunos legisladores habían pedido, las fuerzas franquistas se habrían encontrado en un grave aprieto, especialmente por lo que respecta a los productos petrolíferos, ya que tanto Alemania como Italia no estaban tan sobradas de estos productos como para poder satisfacer las necesidades del ejército rebelde. Vehículos pesados y automóviles fueron elementos muy valiosos para el ejército franquista, dándole una rapidez de maniobra y, por tanto, una pronunciada ventaja logística sobre el ejército republicano. Más de 12.000 vehículos, la mayoría procedentes de las instalaciones de la General Motors en Alemania, suministraron los EE.UU. a las fuerzas de Franco. Si la GM suministró al ejército rebelde todo el material móvil que necesitó, la Texas Oil Corp. hizo lo mismo

con los vitales productos petrolíferos. En su afán de satisfacer los pedidos del bando franquista, Texaco violó en diversas ocasiones la cláusula en la resolución pasada por el Congreso de los EE.UU. que prohibía la concesión de créditos a beligerantes en guerras civiles. Aunque sancionada por el Departamento de Estado en repetidas ocasiones, la Texaco siguió sin inmutarse, concediendo créditos a Franco y suministrándole todos los productos petrolíferos que le pedían. Durante los tres años de guerra, se calcula que la Texaco suministró al ejército franquista con aproximadamente 1.866.000 toneladas métricas de productos petrolíferos (23). Es obvio que la importancia de las ventas norteamericanas al bando rebelde en forma de vehículos y productos energéticos difícilmente se podían infravalorar. El corresponsal de la United Press International en Madrid, Charles Foltz, afirma que durante el transcurso de una entrevista mantenida con el Subsecretario de Asuntos Exteriores español José María Doussinage, poco después de la terminación de la II Guerra Mundial, éste le confesó de una forma confidencial que «... usted debe comprender que nosotros no odiamos a los EE.UU. Sin el petróleo americano, sin los camiones americanos, sin los créditos americanos, nunca hubiéramos ganado la guerra» (24).

Aunque no es nuestra intención el utilizar esta declaración como prueba irrefutable que realmente Franco ganó la guerra debido a los suministros norteamericanos de material, sí se puede utilizar, en

nuestra opinión, para demostrar que lo que Doussinage confesó a Foltz representaba indudablemente un amplio espectro de opinión dentro de los altos estamentos del régimen franquista. Dejando a un lado la respetable opinión de Doussinage y analizando de una forma objetiva la incidencia del material norteamericano en el esfuerzo bélico de los dos contendientes españoles, no hay duda que la importancia de los suministros de los EE.UU. al bando de Franco fueron infinitamente superiores al material recibido por los republicanos de las mismas fuentes. De ahí que, tanto en calidad como en cantidad, la aportación norteamericana al triunfo de las fuerzas de Franco fue de una importancia crucial.

Aunque el vencedor nominal de la guerra fue Franco, su victoria hubiera resultado totalmente imposible de no haber contado con la ayuda inestimable en hombres y material suministrados por Alemania, Italia y los EE.UU. En el plano diplomático, la ayuda indirecta de Francia, Inglaterra y los EE.UU., con su política de no intervención, ofrecieron a Franco una importante asistencia que sin duda alguna facilitó su victoria final. El bando franquista comprendió muy tempranamente la gran incidencia que la guerra de España ejercía sobre la lucha imperialista que en aquellas fechas se estaba desarrollando entre las grandes potencias por la conquista de mercados y esferas de influencia. En este contexto, Franco y sus consejeros se percataron rápidamente de la gran preocupación de los gobiernos de Francia, Inglaterra y los EE.UU. por la suerte que podían correr sus intereses estratégico - económicos en el caso de que se produjera una victoria republicana. Otra

(22) Informe de la Oficina de Control de Armas y Municiones al Secretario de Estado, 8 de septiembre de 1938, DDE, 852.24/769; Bowers al Secr. de Estado, 22 de oct. 1938, DDE 852.00/8589; Richard Traina, *idem*, pp. 66-67; John R. Hubbard, «How Franco Financed His War», *The Journal of Modern History*, diciembre, 1953, pp. 404-405.

(23) Bowers al Secr. de Estado, 7 de enero de 1939, DDE, 852.00/8816; Allen Guttmann, *idem*, pp. 137-138; Richard Traina, *idem*, p. 166; William Phillips, *Diario*, 8 de marzo de 1939.

(24) Charles Foltz, *The Masquerade in Spain* (Boston, 1948), p. 69.



baza que los franquistas jugaron a la perfección fue el temor de las democracias occidentales a verse desplazadas económicamente por los aliados de Franco, Alemania e Italia. En este sentido, Franco procuró sacar el máximo provecho a esta lucha inter - imperialista, maniobrando con destreza para que Francia, In-

glaterra y los EE.UU. sancionaran su victoria prontamente y le ofrecieran ayuda económica para sacarle de la órbita político - económica de Alemania e Italia (25). Los franquistas no se equivocaron demasiado en su apreciación de los principales elementos

(25) John R. Hubbard, *idem*, pp. 404-405.

que fundamentaban la política de los EE.UU. hacia el conflicto civil en España; quizás un detalle cronológico refleja esa política en su máxima profundidad: Franco tomó Madrid el 28 de marzo de 1939; los EE.UU reconocían al gobierno de Franco el día 1 de abril del mismo año.

■ J. D.



Aunque el vencedor nominal de la guerra fue Franco, su victoria hubiera resultado totalmente imposible de no haber contado con la ayuda inestimable en hombres y material suministrados por Alemania, Italia y los EE.UU. (En la foto, Ernest Hemingway, Jorys Ivens, Ilya Ehrenburg y Gustav Regler).